Boletín Oficial

DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

SUSCRIPCIÓN PARTICULAR

EN CORDOBA	Pesetas.	FUERA DE CORDOBA	Pesetas.
Un mes..	8	Un mes..	4
Trimestre..	25	Trimestre..	11 25
Seis meses..	50	Seis meses..	22 50
Un año..	88	Un año..	45

Número suelto, 40 céntimos de peseta.

Se publica todos los días, excepto los domingos.

NOTA IMPORTANTE.—Inmediatamente que los Eres. Alcaldes y Secretarios reciban este "BOLETIN", dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente

Las Leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar en los Boletines Oficiales se han de remitir al Jefe político respectivo, por cuyo conducto se pasarán a los editores de los mencionados periódicos.

(Ordens de 2 de Abril, de 8 y 21 de Octubre de 1854).

Los señores Secretarios cuidarán bajo su mas estrecha responsabilidad, de conservar los números de este Boletín, coleccionados para su encuadernación, que deberá verificarse al final de cada año.

ADVERTENCIA. Conforme con la condición 4.ª del pliego que ha servido de base para la subasta, no se insertará ningún edicto ó anuncio que sea á instancia de parte sin que abonen los interesados el importe de su publicación, ó garanticen el pago, á razón de 25 céntimos por línea ó parte de ella, y la venta de números sueltos á 40 céntimos.

Artículo 1.º Las leyes obligarán en la Península, islas Baleares y Canarias, á los veinte días de su promulgación, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Se entiende hecha la promulgación el día en que termina la inserción de la ley en la Gaceta oficial.

Art. 2.º La ignorancia de las leyes, no excusa de su cumplimiento.

Art. 3.º Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario. (Código civil vigente)

El Real decreto de 4 de Enero de 1898 y la Real orden de 8 de Agosto de 1891, disponen no se otorgue por las Corporaciones provinciales ni municipales ningún documento ni escritura sin que los rematantes presenten los recibos ni haber satisfecho los derechos de inserción de los anuncios de subastas en la Gaceta de Madrid y BOLETIN OFICIAL.

PARTE OFICIAL

Presidencia del Consejo de Ministros

(Gaceta del 23 de Julio.)

SS. MM. el Rey y la Reina Regente (Q. D. G.) y Augusta Real Familia continúan en San Sebastián sin novedad en su importante salud.

REAL DECRETO

En el expediente y autos de competencia promovida entre el Gobernador de Sevilla y el Juez de primera instancia de Utrera, de los cuales resulta:

Que el Registrador de la propiedad de Alcalá de Guadaira, D. Manuel Vaquerizo, en concepto de liquidador del impuesto de derechos reales y transmisión de bienes, presentó al referido Juzgado una cuenta jurada de sus honorarios por las liquidaciones que había practicado en 25 de Junio de 1895 con motivo de la partición de bienes de don Pedro Halcón y Mendoza:

Que al mismo tiempo que esta cuenta, en la que también se comprendía la de la tercera parte de las multas correspondientes á dichas liquidaciones, presentó un escrito, en el que, exponiendo que se veía precisado á recurrir al Juzgado para cobrar los expresados honorarios y tercera parte de multas, solicitaba que se requiriese de pago á los deudores por los medios ejecutivos que establece la ley de Enjuiciamiento civil:

Que el Juzgado acordó se hiciera el requerimiento al pago para que en el término de diez días se satisficiera la suma que de la cuenta jurada aparecía, y expidió al efecto un exhorto al Juez decano de la ciudad de Sevilla, de la que, según el reclamante, había manifestado eran vecinos los deudores:

Que uno de los requeridos al pago

acudió al Delegado de Hacienda de la provincia, á fin de que éste interesase del Gobernador que promoviese competencia al Juzgado de Utrera:

Que previo informe de la Administración de Hacienda, en el que, entre otros particulares, se hacía constar que las liquidaciones de que se trataba habían sido declaradas nulas por la Delegación, habiéndose practicado de nuevo por la oficina liquidadora de Sevilla, á la que se había estimado única competente para efectuarlas, y que estaba ya satisfecho el importe de las mismas, acordó el Delegado, de conformidad con la Asesoría, interesar del Gobernador que suscitase la cuestión de competencia:

Que el Gobernador de Sevilla, de acuerdo con la Comisión provincial, requirió de inhibición al Juzgado de Utrera, fundándose en que el conocimiento de la reclamación hecha por el Registrador de la propiedad de Alcalá de Guadaira, como liquidador del impuesto de derechos reales, era de la exclusiva competencia de las Autoridades de Hacienda, puesto que se trataba de una incidencia de las operaciones practicadas para la cobranza del referido impuesto; citaba como vistos el artículo 3.º, bases 1.ª y 2.ª de la ley de 29 de Mayo de 1868; el núm. 7.º del art. 22 de la ley de 30 de Junio de 1892; los artículos 117, 124, 127 y 130 del reglamento de 25 de Septiembre del mismo año, reproducidos en el 1.º de Septiembre de 1896; la instrucción de 12 de Mayo de 1888, y una sentencia del Tribunal Supremo, invocando además la facultad que le atribuye el art. 27 de la ley de 29 de Agosto de 1882 en los términos establecidos por el Real decreto de 8 de Septiembre de 1887:

Que sustanciado el incidente de competencia, el Juez dió auto en que sostuvo su jurisdicción, alegando: que la doctrina en que se funda la Autoridad requirente no es aplicable al caso de que se trata, puesto que no puede

negarse que el Registrador y liquidador del distrito hipotecario de Alcalá de Guadaira practicó la liquidación de los bienes dejados por D. Pedro Halcón y Mendoza, efectuándolos, no por mera voluntad de las partes, sino por obligarle á ello las disposiciones vigentes; que los liquidadores y Registradores de la propiedad pueden hacer efectivos sus honorarios por la vía de apremio que se tramita, con arreglo á la ley de Enjuiciamiento civil, derecho que tienen, no solamente los Registradores-liquidadores, sino también los Procuradores, Abogados y Escribanos, los cuales, como aquéllos, tienen que ajustarse á la expresada ley, y, por tanto, el Juzgado, al despachar la vía de apremio, no conceptuó la reclamación como cuentas de Procuradores, sino como honorarios de un funcionario que tiene para su cobro la vía ejecutiva; que el art. 3.º, bases 1.ª y 2.ª de la ley de 29 de Mayo de 1868, que somete á los Registradores de la propiedad la liquidación del impuesto de derechos reales, declarándoles dependientes del Ministerio de Hacienda en ese ramo, lo que confirmó el núm. 7.º del art. 22 de la de 30 de Junio de 1892, no es aplicable al caso, en atención á que si bien es cierto que son dependientes del Ministerio de Hacienda en lo referente á la práctica de las liquidaciones del impuesto, no dependen de dicho Ministerio para el cobro de sus honorarios, ni nunca ha tenido competencia la Administración de Hacienda para instruir expedientes, apremiar y cobrar por los derechos ó honorarios que los Registradores liquidadores hayan devengado por su trabajo en aquellas operaciones, pues la misión de la Hacienda y las facultades que á ésta dan las disposiciones citadas atañen pura y exclusivamente á que cobre los derechos que á ella corresponden, y nunca los derechos á los honorarios de los particulares; que lo propio se puede decir de la doctrina citada para fundar la competencia y consignada en

los artículos 117, 124, 127 y 130 del reglamento de 25 de Septiembre de 1892, que reproduce el primero del de 1896, porque aun cuando los liquidadores, en cuanto tales y en todo lo concerniente á las funciones que en este concepto desempeñan, dependan de las Autoridades provinciales, una cosa son las liquidaciones y la dependencia que con las Autoridades de Hacienda en la provincia tengan á este objeto, y otra muy distinta el cobro de sus honorarios por la práctica de dichas operaciones, para el cual no tiene competencia la Administración de Hacienda, ni la ha tenido nunca, ni las disposiciones citadas le someten esa facultad, ni para el cobro de sus honorarios están sujetos dichos funcionarios á procedimientos administrativos; que los honorarios que se reclaman no son descubiertos á la Hacienda ni incidencia para el cobro de los mismos, por lo que, no tratándose de cobrar nada de aquéllos, no puede ser aplicable la instrucción de 12 de Mayo de 1888, y el asunto no es nuevamente administrativo, sino judicial, sin que en nada de lo referente al cobro de esos honorarios y tercera parte de multas que corresponden al Registrador tenga la Hacienda que intervenir; y que por todo lo expuesto, la competencia para conocer en todo lo relativo al procedimiento de apremio para cobrar el citado Registrador-liquidador es del Juzgado y no de la Delegación de Hacienda, con arreglo á los Aranceles por que se rigen dichos funcionarios, al reglamento de derechos reales vigente y á la ley de Enjuiciamiento civil; citaba además el Juez los artículos 3.º y 16 del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en el requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 335 de la ley Hipotecaria, que dice: "Los honorarios del Regis-

trador se pagarán por aquel ó aquellos á cuyo favor se inscriba ó ante inmediatamente el derecho.:

Visto el párrafo segundo del art. 336 de la misma ley, según el cual: "En todo caso se podrá proceder á la exacción de dichos honorarios por la vía de apremios pero nunca se detendrá ni negará la inscripción por falta de su pago.:

Vistos los dos primeros párrafos del art. 304 del reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria, que dicen: "Para proceder el Registrador á la cobranza de sus honorarios por la vía de apremio, según lo dispuesto en el artículo 336 de la ley, formará la oportuna cuenta, con expresión del nombre y apellido del deudor, clase y fecha de las operaciones verificadas en el Registro por las que se hubieren devengado los honorarios, importe de éstos y números del Arancel aplicados. El Registrador presentará escrito al Juez municipal ó al de primera instancia del partido en donde radique el Registro, según la entidad de la reclamación, acompañando la cuenta expresada en el párrafo anterior, y el Juez respectivo despachará el mandamiento, procediendo enseguida al pago por la vía de apremio en la forma prevenida en la ley de Enjuiciamiento civil.:

Visto el párrafo primero del art. 924 del reglamento para la exacción del impuesto de derechos reales de 1.º de Septiembre de 1896, que dice: "Las oficinas de liquidación de los partidos estarán á cargo de los Registradores de la propiedad, conforme al Real decreto de 16 de Marzo de 1886.:

Visto el art. 127 del mismo reglamento, que dice: "Los liquidadores exigirán de los contribuyentes, según el Arancel, las cantidades que deban satisfacerles al recoger la liquidación para hacer el pago del impuesto. El importe de dichas cantidades lo expresarán los liquidadores en el estado mensual de liquidaciones que deben dirigir á la respectiva Administración.:

Visto el art. 130 del expresado reglamento, que previene "que los liquidadores, por su carácter de tales é independientemente de los demás cargos que desempeñen, dependen directamente de los Delegados de Hacienda, y están sujetos por sus actos, faltas ó omisiones á la consiguiente responsabilidad, la cual se declarará y hará efectiva en los términos prevenidos en las disposiciones generales administrativas y en las que especialmente se determinen en este reglamento.:

Visto el art. 145 del mismo, que dice: "El procedimiento para la exacción de toda clase de multas será puramente administrativo, y se incoará y seguirá por la vía de apremio, conforme á instrucción, sin que pueda entablarse recurso alguno mientras no se realice el pago.:

Visto el art. 160 del reglamento de que se trata, que establece que al hacerse efectivo el importe de la multa se liquidará la parte correspondiente al Tesoro, al liquidador y al denunciante. Considerando:

1.º Que la presente cuestión de competencia se ha promovido con ocasión de haber recurrido el Registrador de la propiedad de Alcalá de Guadaíra á los Tribunales ordinarios instando el cobro, por la vía de apremio judicial, de ciertos honorarios relativos á las liquidaciones del impuesto de derechos reales por el mismo practicadas, y el de la tercera parte de multas correspondientes á dichas liquidaciones:

2.º Que si bien el cobro de las cantidades que por concepto del impuesto de derechos reales correspondientes á la Hacienda tienen evidentemente carácter administrativo, es preciso no confundir con esta percepción la de los honorarios de los encargados de practicar las liquidaciones del impuesto.

3.º Que estos honorarios que se devengan con sujeción á Arancel constituyen, respecto de los Registradores de la propiedad encargados de la liquidación, un derecho civil, que debe, por tanto, ser ventilado ante los Tribunales de justicia:

4.º Que, por el contrario, el procedimiento para la exacción de las multas en que, con motivo del referido impuesto, incurran los contribuyentes, es puramente administrativo, según previene el reglamento de 1.º de Septiembre de 1896:

Conformándome con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en decidir esta competencia á favor de la Autoridad judicial en lo que se refiere al cobro de los honorarios que reclama el Registrador de la propiedad de Alcalá de Guadaíra, y á favor de la Administración en lo relativo al de la tercera parte de las multas correspondientes á las liquidaciones practicadas por dicho funcionario.

Dado en Palacio á diez y ocho de Julio de mil ochocientos noventa y nueve.—MARIA CRISTINA.—El Presidente del Consejo de Ministros, Francisco Silvela.

(“Gaceta,” del día 20.)

MINISTERIO DE FOMENTO

REALES ORDENES

Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada, y de acuerdo con el informe dado en 21 de Abril último por la Comisión permanente de ese Consejo;

S. M. el REY (Q. D. G.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, D. Alberto Castro de la Mata, autorizándole la incorporación á la Facultad de Derecho de las asignaturas de Derecho romano, Derecho canónico y Hacienda pública, que tiene aprobadas en la carrera del Notariado, disponiendo á la vez que esta Real orden sirva de precedente para lo sucesivo, siendo de aplicación general para casos iguales ó análogos.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios

guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de Mayo de 1899.—Pidal.

Sr. Presidente del Consejo de Instrucción pública.

Ilmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida á este Ministerio por la Ordenación de pagos del mismo dando cuenta de los reparos que opone el Tribunal de Cuentas al pago de los dos tercios del sueldo de las cátedras vacantes devengados por los Profesores Auxiliares que desempeñan á la vez destinos del Estado, la provincia ó el Municipio:

Considerando que el Real decreto de 23 de Agosto de 1888 y la Real orden aclaratoria de 26 de Septiembre siguiente, señalan como percibo de sueldo para el Profesor Auxiliar numerario los dos tercios de la cantidad consignada en presupuesto para la cátedra vacante:

Considerando que, si bien el Real decreto de 8 de Marzo de 1894 preceptúa que el cargo de Auxiliar es compatible con cualquier otro destino público, es evidente que la simultaneidad de empleos no puede legalmente extenderse al disfrute de dos sueldos, cosa expresamente prohibida por la ley de 9 de Julio de 1835;

S. M. el REY (Q. D. G.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que en lo sucesivo los Profesores Auxiliares numerarios que además sirvan otros destinos, sólo perciban, al encargarse del desempeño de cátedras vacantes, la retribución ó gratificación que como á tales Auxiliares les corresponda.

De real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de Mayo de 1899.—Pidal.

Sr. Director general de Instrucción pública.

Ilmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas por varios Ingenieros del servicio agronómico consultando de cuenta de quién ha de ser el pago de los gastos que se les originen con motivo de los reconocimientos de sarmientos y barbados importados por las Aduanas para ello autorizadas:

Considerando que si bien hasta ahora se han venido satisfaciendo con cargo á los presupuestos del Estado, la necesidad de introducir economías en éstos ha obligado á reducir el crédito al efecto consignado en términos que no permiten continuar verificándolo; y

Considerando, por otra parte, que siendo de justicia reintegrar al Ingeniero que practique el reconocimiento los gastos que la ejecución de este servicio le origina, á hacerlo deben estar obligadas las personas ó entidades á quienes principalmente interesa su práctica y beneficia el despacho de las expediciones;

S. M. el REY (Q. D. G.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que las dietas que devenguen y gastos que se originen á los Ingenieros del servicio agronómico provincial con motivo del reconocimiento de expediciones de sar-

mientos y vides, sean satisfechos en lo sucesivo por sus consignatarios, agentes ó representantes, y que con el fin de evitar dudas y reclamaciones, se fijen dichos gastos, además de los de ferrocarril en primera clase, en 15 pesetas por cada día que invierta, descontados los no laborables, cuando el reconocimiento haya de efectuarse en punto situado fuera del en que tenga su residencia oficial el Ingeniero; y cuando se practique en la capital de la provincia, perciba la cantidad de 15 pesetas por cada expedición que reconozca, incluida en dicha cantidad la certificación que deben librar.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de Mayo de 1899.—Pidal.

Sr. Director general de Agricultura, Industria y Comercio.

Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada, y de acuerdo con el informe dado en 1.º de Mayo último por la Comisión permanente de ese Consejo;

S. M. el REY (Q. D. G.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por D. Gerardo Rodríguez de Armas, autorizándole la incorporación á la Facultad de Derecho de las asignaturas de Derecho canónico y Hacienda pública, que tiene ya aprobadas en la carrera del Notariado, por hallarse comprendido este caso dentro de lo preceptuado en la Real orden de 5 de Mayo pasado; debiendo servir también la presente, como aquella, de regla general para los iguales ó análogos que en lo sucesivo ocurran.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de Junio de 1899.—Pidal.

Sr. Presidente del Consejo de Instrucción pública.

(“Gaceta,” del día 13 de Junio.)

Ilmo. Sr.: En los expedientes promovidos en este Ministerio por Doña María del Buen Suceso Luengo, D. Casimiro Heras y Molina, D. Juan Macho y Moreno, D. Vicente Fráiz y Andón, D. Juan Palgar y Alonso, D. Luis Pérez y Allú, D. Antonio Gil y Argüés, D. Agapito Gómez y D. Justo Urón y Mier, Profesores numerarios en propiedad de las Escuelas Normales Superiores de la isla de Cuba y Puerto Rico, solicitando la declaración de excedentes y su colocación en plazas de Profesores numerarios de Escuelas Normales de Maestros de la Península:

Oído el Consejo de Instrucción pública, S. M. el REY (Q. D. G.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer se declare á los solicitantes excedentes en el Profesorado de las Escuelas Normales y se les nombre Profesores numerarios de Escuelas Normales Superiores en aquellas plazas que no estén anunciadas á oposición ó concurso, y si no hubiere bastantes plazas vacantes de dicha categoría, se les destine, en comisión, á Escuelas Normales elementales hasta que

puedan ser colocados en Escuelas Normales Superiores.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de Mayo de 1899.—*Pidal*.
Sr. Director general de Instrucción pública.
(“Gaceta,” del 16 de Junio.)

Ministerio de la Gobernación

Tribunal de exámenes de Contadores.

El Tribunal de exámenes para Contadores de fondos, atendiendo los perjuicios que se causan con la ilimitada permanencia en Madrid á los aspirantes que habitualmente residen fuera de esta Corte, ha acordado dar principio al segundo ejercicio el día 26 del actual, á las cinco de la tarde, en la Universidad Central, y con el objeto de que los interesados puedan saber si han sido aprobados en el primer ejercicio, y, por lo tanto, si tienen derecho á presentarse al segundo, dicho Tribunal ha dispuesto hacer públicas las calificaciones que han merecido los trabajos que fueron ejecutados en el primer ejercicio, á cuyo efecto se insertarán en la *Gaceta de Madrid* relaciones parciales de los aprobados á medida que el Tribunal vaya verificando la calificación, acompañando al presente anuncio la primera lista, comprensiva de los 200 primeros aspirantes.

Madrid 22 de Julio de 1899.—V.º B.º:
El Presidente, Aparicio.—El Secretario del Tribunal, José Lon y Albareda.

Relación de los aspirantes que han sido aprobados en el primer ejercicio y que pueden presentarse á ser examinados del segundo.

Los que tengan número comprendido entre el 1 y el 200 inclusive, y no figuren en esta relación, han sido desaprobados ó no se han presentado á examen.

Los que tengan número posterior al 200 no han sido calificados hasta la fecha.

Números.	NOMBRES
66	D. Ignacio Martínez Bazán
68	” Raimundo Tirado
69	” León Alfredo Yarte
70	” Enrique Obregón y Ortega
77	” Isaac Ibernón Labastida
78	” Manuel Oria Alonso
79	” Fernando Sánchez Gómez
81	” Juan Sagaz Feijóo
85	” Luis Ponzoa Martínez
87	” Antonio Mancera García
88	” Isidoro Duque Guerrero
90	” Alberto O’Connor
92	” Alfonso García Navarro
93	” Francisco Vicente López
99	” Pedro Hernando Sainz
100	” Felipe Muñido Ballester
103	” Vicente Elegido Marquez
110	” José Tolmo Juda
113	” Aurelio Tolibar de la Vega
117	” Rodrigo García de Castro
121	” José María Company
124	” Manuel Fernández Tuero
130	” Antonio Ripoll Cañellas
131	” Francisco Pérez Años
132	” Francisco Ruiz Ayora
135	” Armando González Vallina
142	” Miguel Suja Viedma
159	” Manuel Alfaro Vázquez
160	” Domingo Ignacio Morales
161	” Virgilio López Gil
168	” Ezequiel García Martínez
170	” José A. Mendez
172	” Manuel López Andrés
174	” Mariano Fernández Figueroa
178	” Tiburcio Avila González
180	” Salvador Morales
181	” Justo Alhambra Peña
186	” José García Villalba
187	” Domingo Poveda García
193	” Ramiro Añibarro Lázaro
195	” José María García Serrano
196	” Rafael Terán López

Madrid 22 de Julio de 1899.—El Secretario del Tribunal, José Lon y Albareda.—V.º B.º: El Presidente, Aparicio.
(“Gaceta,” del día 28.)

DELEGACION DE HACIENDA

DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Núm. 2354

EDICTOS

Don Ramón Montilla y Santerre, Delegado de Hacienda en esta provincia.

Hago saber: que ignorándose el paradero de don Antonio Galvez, cuyo último domicilio conocido fué en la ciudad de Lucena, calle Catalina Marín, núm. 39, y á quien en 5 de Diciembre de 1898 se le instruyó expediente de defraudación por el ejercicio de la industria de “Venta al por menor de semillas, tarifa 1.ª, clase 12.ª, número 33, por el investigador D. Faustino García Enoiso, la Junta administrativa, convocada oportunamente para resolverlo, se ha servido acordar por unanimidad declarar defraudador á la contribución industrial á D. Antonio Galvez, como comprendido en el caso primero del art. 172, y por consiguiente incurso en las responsabilidades que se

determinan en el art. 181 en sus párrafos primero y segundo, y á contar desde 1.º de Julio de 1898.

Practicada la liquidación por la Administración de Hacienda, resulta que el expresado D. Antonio Galvez debe satisfacer por cuotas y recargos la cantidad de 71.70 pesetas, y además 48 pesetas en concepto de penalidad, pudiendo recurrir en alzada dentro del plazo de tres meses, contados desde el día siguiente al que aparezca el presente edicto en la *Gaceta de Madrid*, para ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, según la facultad que le otorga el art. 127 del Reglamento de Procedimientos económico-administrativos de 15 de Abril de 1890, por haber terminado con este fallo la vía gubernativa, conforme al art. 62; debiendo advertirle que en el término de tercero día ha de ingresar las cantidades liquidadas, según preceptúa el art. 83 del repetido Reglamento, y que de no verificarlo, se procederá á hacerlas efectivas por la vía de apremio.

Lo que se hace saber por medio del presente edicto inserto en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, para que llegue á conocimiento del interesado.

Córdoba 22 de Julio de 1899.—El Delegado de Hacienda, R. Montilla.

Núm. 2355

Hago saber: que ignorándose el paradero de doña Carmen Moyano Mora, cuyo último domicilio conocido fué en la ciudad de Cabra, plazuela de Juan Márquez, y á quien en 21 de Diciembre de 1898 se le instruyó expediente de defraudación por el ejercicio de la industria “Zapatería,” tarifa 4.ª, clase 7.ª, núm. 104, por el investigador D. Ramón Arnau, la Junta administrativa celebrada en esta ciudad en 29 de Abril próximo pasado, acordó condenar á doña Carmen Moyano Mora al pago de las cuotas y recargos dejadas de satisfacer desde 1.º de Enero de 1898, más un recargo equivalente al importe de la cuota de tarifa que por un año corresponde á la industria ejercida, según dispone el Reglamento vigente.

Practicada la liquidación por la Administración de Hacienda, resulta que la expresada doña Carmen Moyano debe satisfacer al Tesoro por cuotas y recargos la cantidad de 72.82 pesetas, y además 36 pesetas en concepto de penalidad, pudiendo recurrir en alzada dentro del plazo de tres meses, contados desde el siguiente al que apareza el presente edicto en la *Gaceta de Madrid*, para ante el Tribunal Contencioso administrativo, recurso que señala el art. 127 del Reglamento de Procedimientos en las reclamaciones económico administrativas de 15 de Abril de 1890, por haber terminado con este fallo la vía gubernativa, conforme al art. 62; debiendo advertirle que en término de tercero día ha de ingresar las cantidades liquidadas, según preceptúa el art. 83 del repetido Reglamento, y que de no verificarlo se procederá á hacerlas efectivas por la vía de apremio.

Lo que se hace saber por medio del presente edicto inserto en el BOLETIN

OFICIAL de la provincia, para que llegue á conocimiento de la interesada.

Córdoba 22 de Julio de 1899.—El Delegado de Hacienda, Ramón Montilla.

AYUNTAMIENTOS

HINOJOSA

Núm. 2347

Don José Ortiz y Luque, Alcalde constitucional de esta villa.

Hago saber: que terminados en borrador los repartimientos de la riqueza urbana, rústica y pecuaria de este término municipal, para el año económico actual de 1899 á 1900, quedan expuestos al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por el término de ocho días, para que los contribuyentes en él comprendidos puedan examinarlos y formular cuantas reclamaciones estimen prudentes.

Hinojosa 20 de Julio de 1899.—José Ortiz.

ENCINAS REALES

Núm. 2349

Don Antonio González y Ramírez, Alcalde constitucional de esta villa.

Hago saber: que el Ayuntamiento de mi presidencia, en sesión celebrada el día 16 del actual, y en cumplimiento á lo preceptuado en el artículo 66 de la vigente ley orgánica, ha procedido á determinar el número de secciones para designar por sorteo el de los vocales asociados que en unión de los Concejales han de formar la Junta municipal de esta villa que ha de funcionar durante el presente ejercicio económico, y siendo uniforme el concepto contributivo de los vecinos de esta población, ha dispuesto hacer el repartimiento de aquellas por calles, á tenor de lo dispuesto en la regla 3.ª de dicho artículo, resultando la designación en la forma siguiente:

Sección primera.

Comprende esta sección los contribuyentes de las calles Iglesia, Real, Espectación, Señores Caras y Pilar.

Sección segunda.

Comprende los contribuyentes de las calles Cuarterón, Pilarejo, Grama, Pó-sito y Piedras.

Sección tercera.

Comprende los contribuyentes de las calles Plazuela, Cruz, Pozo Dulce y Barrionuevo.

Sección cuarta.

Comprende los contribuyentes de las calles Corona, Eras, Cantillos y Obispo. Y en cumplimiento á lo preceptuado en el artículo 67 de dicha ley, se publica el presente para que durante el plazo de ocho días puedan los interesados reclamar ante la Diputación provincial.

Encinas Reales 18 de Julio de 1899.—Antonio González.

RUTE

Núm. 2358

Don Mariano Roldán Nogués, Alcalde constitucional de esta villa.

Hago saber: que hallándose terminado el repartimiento individual de la ri-

Números.	NOMBRES
1	D. Miguel González
5	” Sergio Martín Ciruelos
6	” Juan Cobos
8	” Blas Tarazona Ispizúa
12	” Joaquín Muñoz Ramírez
17	” Fernando Rico Rodríguez
18	” José Rico Rodríguez
22	” Angel García Arbeo
23	” Enrique Pasonal Bayala
25	” José Viciot
27	” Florencio Matías Merchante
28	” Franc.º Carbonell Blanco
30	” Gregorio García Chinchilla
34	” Aciselo Lahera
41	” Manuel Martínez Pinelta
50	” Vicente Isach Torrella
52	” Gregorio Crehuat del Amo
56	” Luis Ríos Sánchez
57	” Vicente Martínez Romero
58	” Javier Tiscar Delgado
64	” Antonio Sánchez Carpintero

queza urbana de este término municipal, para el presente ejercicio de 1899 á 1900, queda de manifiesto en esta Secretaría, durante el plazo de ocho días, contados desde el siguiente al en que aparezca inserto este edicto en el BOLETIN OFICIAL, con el fin de que los en él interesados puedan examinarlo y aducir contra el mismo las reclamaciones que á sus derechos convengan.

Rate 21 de Julio de 1899.—Mariano Boldán.

PALMA DEL RIO

Núm. 2363

Don Juan María Almenara Fuentes, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta ciudad.

Hago saber: que el Ayuntamiento de mi presidencia, en sesión al efecto, acordó fuesen cuatro las secciones, bajo las cuales se instruyera el expediente para en su día la designación por sorteo de la Junta municipal para el actual ejercicio, en armonía con lo que dispone el artículo 66 de la ley municipal vigente.

Palma del Río 20 de Julio de 1899.—Juan M. Almenara.

MONTURQUE

Núm. 2364

Don Rafael de Lara Jiménez, Alcalde constitucional de esta villa.

Hago saber: que hallándose terminada la matrícula del subsidio industrial y de comercio de esta villa, para el corriente ejercicio de 1899 á 1900, queda expuesta al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término de ocho días, que empezarán á contarse desde el siguiente al en que aparezca el presente inserto en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, para que los contribuyentes en ella comprendidos puedan presentar las reclamaciones que á su derecho convengan.

Monturque 19 de Julio de 1899.—Rafael de Lara.

JUZGADOS

POSADAS

Núm. 2369

Don Fabián Ruiz Briceño, Juez de instrucción de esta villa y su partido.

Por la presente, que se insertará en la *Gaceta de Madrid* y BOLETIN OFICIAL de esta provincia se cita, llama y emplaza al procesado, gitano, José (a) Oachero, cuyas señas después se expresarán, á fin de que dentro del término de diez días, comparezca ante este Juzgado, á contestar á los cargos que le resultan en el sumario que me hallo instruyendo por hurto frustrado de caballerías, contra aquel y otro; apercibido que de no verificarlo le parará el perjuicio á que hubiere lugar y será declarado rebelde.

Al propio tiempo ruego y encargo á toda clase de autoridades, tanto civiles como militares é individuos de la policía judicial, se sirvan proceder á la busca y captura de dicho procesado, poniéndolo, caso de ser habido, en la cárcel de este partido y á mi disposición, con las seguridades convenientes, pues así lo tengo acordado en referido sumario.

Dada en Posadas á veinte y uno de Julio de mil ochocientos noventa y nueve.—Fabián Ruiz.—El Secretario, Félix Nogués.

Señas

Un gitano llamado José (a) Oachero, de estatura alta, delgado, moreno, con bigote negro y de unos treinta y dos años de edad, el cual ha habitado en Córdoba, en la casa número 16, entrando por la puerta de Almodóvar, en la segunda calle de la izquierda.

MONTORO

Núm. 2352

El señor Juez accidental de instrucción de esta ciudad y su partido, en resolución de este día, dictada en causa criminal que instruye por el delito de hurto de caballerías, contra Calixto Fernández Sánchez, he acordado se cite á Antonio Moreno, cuyas señas son: bajo de cuerpo, fornido, rubio, de unos treinta y seis años y con bigote, cuyo actual paradero se ignora, para que en el término de diez días, comparezca ante este Juzgado, á fin de prestar declaración en indicada causa, entendiéndose que dicho término empieza á correr y contarse desde la inserción de la presente en la *Gaceta de Madrid* y BOLETIN OFICIAL de esta provincia; apercibido que de no comparecer le parará el perjuicio á que haya lugar en derecho.

Dado en Montoro á diez y seis de Julio de mil ochocientos noventa y nueve.—El actuario, Licenciado Juan Miguel Criado.

FUENTE OBEJUNA

Núm. 2358

Don Alfonso Gómez Bellido, Juez de instrucción de esta villa y su partido.

Por el presente, que se insertará en el BOLETIN OFICIAL de esta provincia y *Gaceta de Madrid*, se excita el celo de todas las autoridades y dependientes de la policía judicial, para que procedan á la busca de dos mulas, cuyas señas al final se expresarán, hurtadas en la madrugada del catorce del actual, del sitio del Calvario, término municipal de Valsequillo, propiedad de Jesús Ruiz Cerrate, vecino de dicha villa, y caso de ser habidas las pongan á disposición de este Juzgado, con las personas en cuyo poder se encontraren, si no acreditan su legítima adquisición, por cuyo hecho se instruye el oportuno sumario.

Dado en Fuente Obejuna á veinte y uno de Julio de mil ochocientos noventa y nueve.—Alfonso Gómez.—El Escribano, Andrés Angel.

Señas de las mulas

Dos mulas pelo rojo oscuro, de diez y seis años próximamente, menos de marca las dos, una más baja que otra, con dos lunares blancos en el espinazo la más baja.

BELMEZ

Núm. 2362

Cédula de citación

El señor don Heliodoro Díaz Platero, Juez municipal de esta villa, por providencia de hoy, recaída en diligencias que se siguen en este Juzgado por juegos prohibidos, ha mandado se cite á los acusados Francisco Merino López,

Juan Pérez Sánchez, Antonio Toledo Ruiz y Justo Molina Herrera, de los cuales se ignora el paradero, para que á las diez de la mañana del día cinco del próximo mes de Agosto, comparezcan para celebrar el correspondiente juicio de faltas, en la sala de Audiencia de este Juzgado, sito en el piso bajo de la Casa Ayuntamiento de esta población; apercibiéndoles que de no concurrir les parará el perjuicio que hubiere lugar.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de esta provincia y en la *Gaceta de Madrid*, expido la presente en Belmez á veinte de Julio de mil ochocientos noventa y nueve.—El Secretario, Tomás Pacheco.

Exposición de París de 1900

La Comisión Ejecutiva de dicha Exposición ha circularo ya las invitaciones correspondientes á Bellas Artes para concurrir al Certamen. Los artistas que deseen figurar en el mismo deberán solicitarlo previamente, suscribiendo al efecto la correspondiente petición, en los impresos que se facilitarán gratuitamente en la Secretaría de la Comisión provincial (Gobierno civil de la provincia).

El plazo para formalizar las peticiones de inscripción provisional de que se trata, terminará el 31 de Agosto próximo.

Sección de anuncios

En apoyo de la advertencia que se hace en la cabeza de este periódico oficial, y para mejor inteligencia de cuantos en el orden oficial ó particular publiquen anuncios, sea cual fuere su procedencia, se inserta á continuación el siguiente documento:

«Ministerio de la Gobernación

REAL ORDEN

Vista la instancia elevada á este Ministerio por los Notarios del mismo en súplica de que se recuerde á las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos, en la forma más conveniente, que no procedan al otorgamiento de la escritura de los contratos que celebren, sin que el rematante acredite, según está prevenido, que ha satisfecho los honorarios devengados por los mismos al autorizar el acto:

Considerando que el Real decreto de 4 de Enero de 1883 dispone en su artículo 3.º que en los pliegos de condiciones se consignará *necesariamente*, entre otras que cita, «la obligación del rematante de pagar los honorarios, escrituras y gastos de toda clase que ocasione la subasta y formalización del contrato», y que, en vista de tal precepto, es incontrovertible que el rematante tiene la obligación de sufragar los honorarios que con arreglo al Arancel devenguen los Notarios que autoricen el acto, más los suplementos que éstos para el caso adelanten:

Considerando que, á pesar de ser tan claro y terminante el precepto

referido, las Corporaciones citadas no muestran el celo que debían exigirle á los rematantes de los contratos que celebran los recibos de los gastos mencionados, aun cuando para recordarles el cumplimiento de tal particular exista además la Real orden de 20 de Septiembre de 1875 disponiendo que se exija el de pago de los derechos de inserción de los anuncios en la *Gaceta de Madrid*; y

Considerando, por último, que cuando los indicados preceptos vienen en pro de la petición de los Notarios, es absurdo que éstos, aparte de no percibir los honorarios á que tienen perfecto y legal derecho, sufraguen además los gastos de papel sellado y timbres necesarios al cumplimiento de su cometido, para el cual son solemnemente requeridos;

S. M. el REY (Q. D. G.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que en lo sucesivo las Corporaciones provinciales y municipales no procedan al otorgamiento de la escritura de los contratos que celebren, sin que en el acto de referencia exhiban los rematantes, además del resguardo de haber constituido la fianza definitiva en su caso, teniendo en cuenta para ello lo expresado en el art. 21 del Real decreto de 4 de Enero de 1883, los recibos de haber satisfecho los derechos devengados y suplementos adelantados por el Notario ó Notarios autorizantes de la subasta, si ésta, por exceder de 50.000 pesetas, hubiere sido doble y simultánea; y además igual documento que acredite haber satisfecho los derechos de inserción de los anuncios en la *Gaceta de Madrid* y BOLETIN OFICIAL de la provincia. Al propio tiempo que cuando los contratos se celebren por Administración, por hallarse comprendidos en el caso que, como eximentes de subasta, marca el párrafo 5.º del art. 36 del Real decreto de 4 de Enero de 1883 ya citado, ó sea en el de que se hayan celebrado dos subastas al efecto, sin que en ellas se presentaran los licitadores, se exija igualmente al concesionario, antes de otorgar la escritura, análogos documentos que justifiquen el pago de los derechos de referencia; entendiéndose también que si la Corporación llevase á cabo por sí propia el servicio ó obras que hubiese intentado contratar, será ella misma la obligada á abonar al Notario ó Notarios los derechos devengados por éstos al autorizar la subasta mencionada.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes; advirtiéndole que á la mayor brevedad deberá remitir V. S. á este Ministerio un ejemplar del BOLETIN OFICIAL de esa provincia en que se inserte esta Real orden. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Agosto de 1891.—Silvela.

Sr. Gobernador de la provincia de...

LOS NUEVOS REPARTIMIENTOS de rústica y urbana, con arreglo á los modelos oficiales, se hallan de venta en la imprenta del «Diario de Córdoba», Letrados, 18.

Imprenta del DIARIO DE CORDOBA